

I. AS NOSAS LEIS

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA TRAS LA STC 185/1995. NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LEY 6/2003, DE 29 DE DICIEMBRE, DE TASAS, PRECIOS Y EXACCIONES REGULADORAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

JOSÉ MANUEL IGLESIAS CASAIS

Investigador adscrito al Área de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela

Nuestra Carta Magna, con el fin de dotar a las CCAA de verdadera autonomía financiera (artículo 133 de la CE), les reconoce en su artículo 157.1.b) entre sus recursos "sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales". En el mismo sentido, el artículo 7 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas¹, establece la competencia de las mismas para establecer tasas por la utilización de su dominio público, así como por la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho Público de su competencia.

Haciendo uso de este título competencial la mayoría de las CCAA han elaborado su propia ley de tasas y precios públicos distinta de la estatal (Ley 8/1989, de 13 de abril de Tasas y Precios públicos²), que, en todo caso, será de aplicación supletoria.

De esta manera, en la Comunidad Autónoma gallega, a día de hoy, la regulación en la materia se ha llevado a cabo a través de la Ley 6/2003, de 29 de diciembre, de Tasas, Precios y Exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia³, que vino a sustituir a la anterior Ley 13/1991, de 9 de diciembre⁴, por la necesidad de adaptar la legisla-

¹ B.O.E. de 1 de octubre de 1980, en adelante LOFCA.

² B.O.E. de 15 de abril 1989, en adelante LTPP.

³ DOG nº 240 de 11 de diciembre de 2003.

⁴ Ley 13/1991, de 9 de diciembre, de Precios, Tasas y Exacciones parafiscales (DOG nº 241, de 13

tasas de inspección y controles sanitarios oficiales de carnes frescas y carnes de conejo y caza ¹⁰.

También serán de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia¹¹, la Ley General Tributaria ¹² y demás disposiciones generales en materia tributaria, así como aquellas disposiciones dictadas en desarrollo de las mismas, en cuanto resulten de aplicación, con arreglo al régimen jurídico establecido en la presente Ley para cada instrumento financiero en concreto (artículos 6.1, 6.2, 8, y 44 de la Ley 6/2003).

Por su parte, los instrumentos financieros transferidos por el Estado o las corporaciones locales gallegas a la Comunidad Autónoma se rigen por lo dispuesto en las disposiciones transitorias de los decretos de traspaso. En caso de silencio de las normas de traspaso, se les aplican las normas autonómicas en todos sus términos desde el momento en que tenga efectividad el traspaso de las competencias , salvo por lo que se refiere a su cuantía , exigiéndose la establecida en la correspondiente normativa estatal o local en el momento de la transferencia hasta el momento en que la misma sea establecida por el correspondiente acto normativo de la Comunidad Autónoma de Galicia (artículo 6.3 de la Ley 6/2003).

I. Ámbito de aplicación

Como expresamente se señala en su artículo primero la Ley 6/2003 pretende regular los *aspectos financieros de la actividad de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, en cuanto dicha actividad pretenda determinar o influir en el consumo o consista en la entrega de ciertos bienes o la prestación de ciertos servicios, en ambos casos individualizables* ¹³. Ahora bien, pese a lo declarado en este precepto, no sólo se limita a establecer las reglas aplicables a esta clase de ingresos financieros (*tasas, precios públicos y precios privados*), sino que, además , regula otras categorías de ingresos y gastos públicos a los que denomina *instrumentos reguladores (exacciones y subvenciones* - ya creados en la Ley 13/1991-) con los que se pretende incentivar o desincentivar el consumo de ciertos bienes o servicios.

¹⁰ DOG nº 124, de 29 de junio de 2004.

¹¹ Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario. DOG nº 214 de 5 de noviembre de 1999.

¹² Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (RCL 2003, 2945).

¹³ A estos efectos, se entiende que el consumo de un bien o servicio es individualizable cuando existe una demanda definida de éste, tanto si la misma es de carácter voluntario como si tiene su origen en una obligación legal.

cialmente idéntico al contenido en la legislación estatal - artículos 2.2.a) de la LGT, 6 de la LTPP y 7 de la LOFCA - y que proviene de la Ley de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público, de 13 de julio de 1998, dictada como consecuencia directa de la modificación en la configuración legal de las tasas que en aquel momento supuso la STC 185/1995, de 14 de diciembre, que declaró la inconstitucionalidad de varios preceptos de la LTPP.

Así, se definen las tasas de la Comunidad Autónoma de Galicia como aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en:

-A. *La utilización privativa, la ocupación o el aprovechamiento especial del dominio público* ¹⁶ de la Comunidad Autónoma de Galicia ¹⁷.

Galicia o en la entrega de bienes, prestación de servicios o realización de actividades en régimen de derecho público por parte de los sujetos activos a que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo, siempre y cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:

Primera. Que la entrega de bienes, prestación de servicios o realización de actividades no sean de solicitud voluntaria para los administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud por parte de los administrados:

-Cuando venga impuesta por las disposiciones legales o reglamentarias, o

-Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.

Segunda. Que no se entreguen, presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente".

¹⁶ La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (Ley 33/2003, de 3 de noviembre, B.O.E. nº 264 de 4 de noviembre de 2003) los define en su art. 5 como "los que siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales". Por su parte, el artículo 339 del Código Civil considera bienes de dominio público los destinados al uso público ("caminos, canales, ríos, puertos y puentes construidos por el Estado, las riberas, playas, radas y otros análogos"), a algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional ("murallas, fortalezas y demás obras de defensa del territorio").

¹⁷ En todo caso, es requisito esencial que los bienes que se utilizan sean de dominio público o estén situados en el mismo para que pueda exigirse una tasa por tal concepto, como expresamente ha sido declarado por el Tribunal Supremo en las sentencias de 8 de febrero y 5 de mayo de 2000 (RJ 2000/779 y 4482); cuestión que plantea serias dudas a la doctrina en relación con los soportes publicitarios visibles desde la vía pública local pero no instalados en ella, en los que no existe ni uso privativo ni aprovechamiento especial de dominio público que, en este caso, sería el aire sobre el que, además, no hay reserva alguna (véase, en relación con estas tasas, la crítica de SIMÓN ACOSTA, E.:

Finalmente la *cuantía* de este tipo de tasas se fija de acuerdo con las tarifas fijadas en el Anexo 5 de la Ley. Dichas tarifas se prorratearán en función del tiempo de disfrute de la concesión o autorización durante el primer año y el último de duración de las mismas, computándose el tiempo en meses enteros, redondeándose a estos efectos el número de meses al entero inmediatamente superior.

-B. o, *la entrega de bienes, prestación de servicios o realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo, siempre y cuando no sean de solicitud voluntaria para los administrados (no se considerará voluntaria la solicitud por parte de los administrados a estos efectos cuando venga impuesta por las disposiciones legales o reglamentarias; o cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante) o no se entreguen, presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.*

La Ley 6/2003 adopta la distinción tradicional entre prestación de servicios y realización de actividades administrativas contemplada en los artículos 2 LGT y 6 de la LTPP (supuestos que presentan ciertas diferencias conceptuales, pues no toda actividad administrativa implica necesariamente la prestación de un servicio público, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de mayo de 1996 relativa a la actividad documental de las Administraciones ²¹), pero va más allá, al incluir en la descripción que del hecho imponible se realiza en su artículo 7 *la entrega de bienes* como hecho con sustantividad propia que da lugar a un tipo concreto de tasa: la que denomina en su artículo 13.c) tasa por la venta de bienes.

La distinción no es baladí, pues va a tener su reflejo en la cuantificación de la tasa, que comprenderá el coste conjunto del servicio, el coste de la actividad administrativa o el valor del bien ²².

La entrega de bienes, prestación de servicios o realización de actividades ha de efectuarse en *régimen de Derecho Público*, entendiéndose cumplido este requisito según el ar-

torización, respecto al año en curso y el 1 de enero en los sucesivos años. En aquellos supuestos de concesiones en que el término inicial se vincule a la fecha de extinción de otra concesión o a la fecha de finalización de obras que ejecuta la autoridad portuaria, el devengo se producirá en esas fechas el primer año y el 1 de enero en los sucesivos años.

²¹ RJ 1996/4918.

²² Véase en este sentido MARTÍN FERNÁNDEZ, J. y ANEIRO PEREIRA, J.: La Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos, cit., p. 68; y RUIZ GARIJO, M.: Problemas actuales de las tasas, Lex Nova, Valladolid, 2002, p. 120.

III.2 . Clases de tasas autonómicas

La enumeración de supuestos de hecho que constituyen su hecho imponible sirve de base al legislador gallego para distinguir cuatro tipos de tasas en su artículo 13:

III.2.a. Tasas por servicios administrativos (artículos 21 a 25)

Incluyen todas aquellas tasas cuyo hecho imponible consista en la prestación de un servicio administrativo que se refiera, afecte o beneficie de un modo particular a los sujetos pasivos.

Puede tratarse de tasas por la concesión de autorizaciones, permisos, licencias, guías, expedición de títulos, o documentos que faculten al sujeto pasivo para realizar una actividad sometida legalmente a dicha condición previa, por la inscripción en registros, matrículas, por la verificación de documentos, expedición de certificaciones, copia de archivos, elaboración de documentos acreditativos de información que obre en archivos o registros públicos, etc.

Ahora bien, no se exige este tipo de tasas cuando el servicio administrativo consista en compulsas o cotejos de documentos que hayan de acompañarse a solicitudes, escritos o comunicaciones presentados por el ciudadano y realizados en el ámbito de actuación de los registros según lo dispuesto en el artículo 38.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

III.2.b. Tasas por servicios profesionales (artículos 26 a 32)

Son aquellas cuyo hecho imponible consiste en la prestación, por parte de profesionales facultativos al servicio de las Administraciones Públicas autonómicas de los servicios que se refieran, afecten o beneficien de un modo particular a los sujetos pasivos, previa solicitud de éstos, ya se trate de servicios administrativos, análogos a los sometidos a la tasa por servicios administrativos, cuando la prestación de los mismos requiere que se lleve a cabo bajo la dirección de un profesional facultativo; o servicios de asesoramiento, consulta, dirección técnica de obras, emisión de informes, análisis, dictámenes u opiniones profesionales y, en general, actividades que exigen la cualificación que tiene el profesional que las presta.

III.2.c. Tasas por venta de bienes (artículos 33 a 37)

En esta modalidad el hecho imponible viene representado por la entrega por parte de las Administraciones de la Comunidad Autónoma de Galicia de los bienes solicitados. Cuando el suministro del bien consista en entregas parciales, el hecho imponible se entenderá realizado en cada una de ellas.

contemplado en norma de rango legal y siempre dentro de los límites dispuestos por la misma, sin que, en ningún caso la cuantía pueda exceder, en su conjunto, del coste total de producción del bien, servicio o actividad (artículo 11).

En efecto, como ha señalado el Tribunal Constitucional en la STC 233/1999, la mayor flexibilidad de la reserva de Ley en materia de tasas se explica porque la colaboración del reglamento *"puede ser especialmente intensa en la fijación y modificación de cuantías... y de otros elementos de la prestación dependientes de las específicas circunstancias de los distintos tipos de servicios y actividades. En cambio, esta especial intensidad no puede predicarse de la creación ex novo de dichas prestaciones ya que en este ámbito la posibilidad de intervención reglamentaria resulta sumamente reducida puesto que sólo el legislador posee la facultad de determinar libremente cuáles son los hechos imponibles y qué figuras jurídico tributarias prefiere aplicar en cada caso"*.

Por otra parte, la aplicación de una tasa establecida a supuestos concretos de utilización privativa, ocupación o aprovechamiento especial del dominio público de la Comunidad Autónoma de Galicia, venta de bienes, realización de actividades o prestación de servicios puede hacerse en la Ley de Presupuestos de cada año ²⁹. Asimismo, en dicha Ley, se podrán modificar y actualizar las cuotas tributarias correspondientes a las tasas vigentes.

que insiste en que, en todo caso, la Ley es límite de la potestad reglamentaria, debiendo ceñirse ésta, en todo caso, a los parámetros fijados por aquélla. Así, las disposiciones reglamentarias pueden concretar el establecimiento de una tasa, pero sólo partiendo de los elementos esenciales del tributo que deben estar prefijados en la Ley. Véase a modo de ejemplo las SSTC 37/1981, 19/1987, y la trascendental 185/1995, en las que se insiste en que, si bien la cuantía constituye un elemento esencial de toda prestación patrimonial (amparada, por tanto, por la reserva de Ley), ésta no comprende todos los elementos determinantes de la indicada cuantía. En definitiva, pueden preverse remisiones a la potestad reglamentaria siempre que no constituyan "una degradación de la reserva formulada por la Constitución en favor del legislador".

²⁹ En uso de esta potestad establecida en el artículo 9.4 de la Ley, se aplican las tasas ya existentes a los siguientes nuevos servicios prestados por la Administración autonómica de Galicia: expedición de tarjetas de tacógrafo digital en el sector de los transportes por carretera, consecuencia de la entrada en vigor de disposiciones comunitarias dirigidas a la armonización de las condiciones de competencia entre transportistas; tramitación de las concesiones de televisión y radio digital; informes de evaluación de ensayos clínicos y de los estudios post-autorización para medicamentos de uso humano y productos sanitarios, consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero; expedición de autorizaciones ambientales; autorizaciones para la celebración de pruebas deportivas en las vías públicas; inscripciones provisionales de máquinas de juego; y, autorizaciones para la fabricación de productos sanitarios a medida.

III.3.c . Principio de equivalencia (artículo 11)

Pese a que la CE no lo reconoce como uno de los principios que informan nuestro sistema tributario, sí lo hace la Ley 6/2003, al igual la LTPP (artículos 7 LTPP) y la LOFCA (artículo 7.3), de tal manera que su combinación con el principio de capacidad económica servirá para la determinación de la cuantía de las tasas.

El principio de equivalencia hace referencia a la necesidad de correspondencia entre la tributación y la utilidad derivada del gasto público, de tal manera que la persona que se beneficia de un servicio o actividad administrativa, se vea obligada a satisfacer una tasa equivalente ³⁴.

Opera, por lo tanto, como un límite a la cuantía de las tasas, y en cuanto tal ha sido recogido por el artículo 11 de la Ley 6/2003 que señala en idénticos términos que el artículo 7 LTPP que "*el rendimiento total previsible de la tasa no podrá exceder, en su conjunto, del coste total de producción del bien, servicio o actividad*".

Puede afirmarse, así, que en la fijación de la cuantía de esta clase de tributo este principio tiene un mayor peso que el principio de capacidad económica, hasta el punto de que constituyen una auténtica contraprestación del servicio o actividad administrativa ; característica que los diferencia de los impuestos, que son tributos exigidos sin contraprestación y cuyo hecho imponible, constituido por negocios, actos o hechos, de naturaleza jurídica o económica, pone de manifiesto la capacidad contributiva del mismo sujeto, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de los bienes o la adquisición o gasto de renta.

III.4. Sujetos pasivos

A diferencia de la Ley estatal (artículo 16 de la LTPP) no existe un artículo que defina con carácter general los sujetos pasivos de las tasas de la Comunidad Autónoma de Galicia, sino que se definen con carácter específico para cada una de las modalidades de tasas contempladas por la Ley 6/2003 en atención a su hecho imponible. Así, tienen tal conside-

³⁴ La predominancia de este principio sobre el de capacidad económica en las tasas es lo que ha llevado a algunos autores a definir esta clase de tributo en relación con el mismo. Así, PUGLIESE considera la tasa una compensación especial, por un servicio individual prestado por el Estado u otro Ente público al ciudadano y solicitado por éste (*Le tasse nella scienza en el Diritto positivo italiano*, Cedam, Padova, 1930, p. 5); y, de la misma manera, SELIGMAN define la tasa como el pago por un servicio administrativo del cual se deriva un beneficio especial y cuantificable (*Essays in taxation*, London, 1925, pág. 412).

rización, respecto al año en curso y el 1 de enero en los sucesivos años (artículos 14.1.a y 41 Ley 6/2003).

Las tasas por la venta de bienes se devengan en el momento de la entrega del bien, y, en aquellos casos en que la entrega del bien se realice de manera periódica a consecuencia de la realización de una suscripción por el sujeto pasivo, la tasa se devengará en el momento en que se realice dicha suscripción (artículos 14.1.a y 36 Ley 6/2003).

Por último, las tasas por la prestación de servicios profesionales se devengan cuando se inicia la prestación del servicio, sin perjuicio de las especialidades que se señalan en el artículo 31.2 y 3 (artículos 14.1.a y 31 Ley 6/2003).

Cuando las tasas se devenguen periódicamente, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, pueden notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante anuncios en el "Diario Oficial de Galicia".

III.6. Cuota tributaria

La ley gallega fija en su artículo 15 el importe de las tasas de una manera esencialmente igual a la LTPP estatal (artículo 19 LTPP), si bien contiene algunas especialidades que a continuación examinaremos.

Así, al igual que en la norma estatal, la cuota tributaria puede consistir en una cantidad fija señalada al efecto, determinarse por aplicación de un tipo de gravamen sobre una base imponible, o bien establecerse por aplicación de ambos métodos conjuntamente (artículo 15.1); teniendo en todo caso presente el límite máximo impuesto por el principio de equivalencia contemplado en el artículo 11, en cuya virtud la cuantía en ningún caso podrá exceder, en su conjunto, del coste total de producción del bien, servicio o actividad, o, en los casos de utilización privativa, ocupación o aprovechamiento especial del dominio público de la Comunidad Autónoma de Galicia, del valor de mercado correspondiente o el de la utilidad derivada de la misma.

Así las cosas, si bien las cuotas han de establecerse atendiendo al coste medio real o previsto para la entrega del bien, prestación del servicio o realización de la actividad de que se trate, o, en su defecto, al valor de la prestación recibida (excepto en la tasa por utilización privativa, ocupación o aprovechamiento especial del dominio público de la Comunidad Autónoma de Galicia, que se fija tomando como referencia el valor de mercado correspondiente o el de la utilidad derivada de aquella); en la determinación de dicho importe han de tenerse en consideración no sólo los costes directos, sino también los indirectos, incluyendo los de carácter financiero, amortización del inmovilizado, costes de inversión y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento, expansión y desarrollo razonable del

A diferencia de lo que sucede con la LTPP (artículo 21 LTPP), que sólo contempla el pago como modo de extinción de la obligación tributaria, la Ley 6/2003 prevé las dos formas de extinción normal de la misma : el pago, al señalar en su artículo 16 que éste "*se efectuará mediante ingreso en el tesoro de la Hacienda gallega, con arreglo a las modalidades reglamentariamente establecidas. Podrá igualmente autorizarse el pago de las tasas mediante el empleo de efectos timbrados de la Comunidad Autónoma de Galicia en los términos que reglamentariamente se determinen*"; y la prescripción , al remitirse en su artículo 20 en "*todo lo relativo a la prescripción e infracciones y sanciones...*" a la Ley General Tributaria y demás disposiciones generales en materia tributaria (artículos 66 y siguientes que establecen un plazo de prescripción de cuatro años).

Es de destacar que el apartado 5 del artículo 16 de la Ley ha sido modificado por la Ley 14/2004, de 29 diciembre ³⁷, con el fin de adaptarlo a las novedades introducidas por la LGT en materia de aplazamientos y fraccionamientos del pago, remitiéndose este precepto en su redacción actual a lo dispuesto en la materia por la LGT.

Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Galicia pueden exigir el pago en cualquier momento entre la solicitud y el devengo, o bien en el momento de la solicitud cuando ésta coincida con el devengo. También puede exigirse el anticipo o depósito previo del importe total o parcial de las tasas en la forma que, a propuesta de la Consellería competente en materia de Hacienda, se determine reglamentariamente. De no producirse el mismo, los sujetos activos han de denegar la utilización privativa, ocupación o aprovechamiento especial del dominio público, la entrega del bien, prestación del servicio o realización de la actividad cuando el sujeto pasivo incumpla el pago (artículo 16.1 y 2).

Cuando la actuación administrativa que constituye el hecho imponible ya se hubiera realizado, la Administración ha de acudir a la vía apremio para el cobro de las deudas tributarias por las tasas devengadas y no satisfechas en los plazos establecidos reglamentariamente, conforme a la normativa que sea de aplicación (artículo 16.6).

De la misma manera, cuando, por causas no imputables al sujeto pasivo, no se hubiera llevado a cabo el hecho imponible procede la devolución de las cantidades que el contribuyente hubiera pagado (artículo 16.2).

Por su parte, la fiscalización, el control contable y las funciones de inspección financiera y tributaria, así como la potestad sancionadora en la materia, corresponden a la Consellería competente en materia de Hacienda. De la misma manera, las funciones relativas a los procedimientos de recaudación corresponden a la Consellería competente en materia de

³⁷ LG 2004, 387.

De esta definición se desprenden las siguientes características de este tipo de ingresos no tributarios:

- pese a su similitud con los tributos, particularmente con las tasas, *no son tributos* (prestaciones pecuniarias nacidas *ex lege*), sino que constituyen auténticas contraprestaciones pecuniarias (precios) nacidas de un contrato de Derecho público entre el ente y el sujeto pasivo.

- coinciden con las tasas en que se exigen por la prestación de servicios o realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público, pero, a diferencia de éstas, es necesario que, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.

IV.1.b. Obligados al pago

Están obligados al pago las personas físicas o jurídicas que soliciten las actuaciones administrativas determinantes de su exigibilidad, si bien el artículo 45 se limita a señalar genéricamente que estarán obligados al pago "*quienes, en cada caso, determine la norma que los establezca*".

IV.1.c. Establecimiento

Asumiendo las consideraciones hechas por el TC en la STC 185/1995, su establecimiento no está sometido al principio de reserva de ley. Así, el artículo 47, de manera similar a lo que sucede con el artículo 26.1 de la LTPP estatal, establece su fijación por Decreto, a propuesta de la Consellería de la que dependa el órgano o entidad oferente ⁴⁰.

IV.1.d. Cuantía

Al igual que los precios públicos estatales y locales (artículos 25 LTPP y 44.1 LHL), su cuantía ha de fijarse de manera que "cubra como mínimo los costes económicos derivados del servicio o de las actividades prestadas" (artículo 46).

privativa del dominio público, hasta ese momento consideradas tasas y que, de esta manera, quedaban al margen del principio de reserva de Ley.

⁴⁰ Dicha propuesta debe incluir una memoria económica que contenga información suficiente respecto al coste de prestación de los bienes o servicios de que se trate, así como una justificación de la política de precios propuesta, suficiente para cubrir los costes totales, sin perjuicio de la posible subvención reguladora correspondiente. Asimismo, se requiere un informe favorable la Consellería competente en materia de Hacienda sobre la misma.

IV.2. Precios privados

En contraposición a los precios públicos, tienen la consideración de precios privados según la Ley 6/2003 las contraprestaciones por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho privado cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados (artículo 50). Los actos, negocios y, en general, relaciones jurídicas que se deriven de los mismos, en consecuencia, se rigen por las normas de Derecho privado que resulten de aplicación (artículo 53⁴¹).

Al igual que los precios públicos, su establecimiento se atribuye a las Consellerías correspondientes, previo informe favorable de la de Economía y Hacienda (artículo 51). La norma que fije estos precios ha de ser publicada en el "Diario Oficial de Galicia".

Su gestión se atribuye a las Administraciones públicas de la Comunidad competentes, que quedan sometidos a las mismas obligaciones señaladas para los precios públicos, en virtud de la remisión que el artículo 52 efectúa al artículo 48 de la norma.

V. Instrumentos reguladores: exacciones y subvenciones

El Título III de la Ley 6/2003, artículos 54 a 56, se dedica a lo que ésta ha dado en llamar *instrumentos reguladores*. No se trata, como a primera vista pudiera pensarse, de una nueva categoría de ingresos públicos, sino de una especie de cajón de sastre comprensivo tanto de ingresos (las *exacciones*, a las que reconoce en su artículo 56 naturaleza tributaria) como de gastos (las subvenciones) creado por el legislador autonómico para dar cabida a dos figuras de marcado carácter extrafiscal; pues, como expresamente se reconoce en el propio texto legal (artículo 54) se trata de medios utilizados *con la intención de influir sobre el consumo de ciertos bienes o servicios*.

Así, la aplicación de una *exacción reguladora* determina una tarifa para el consumidor o usuario superior al importe normalmente percibido por la institución o entidad oferente del bien o servicio de que se trate (efecto desincentivador). Por el contrario, cuando el efecto que se busca, es, precisamente, incentivar el consumo del bien o servicio, se optará por la utilización de una *subvención reguladora* que permite aplicar a los consumidores precios o tarifas inferiores al coste de producción de los bienes o servicios.

⁴¹ En este artículo se constata la existencia de un error en su redacción, pues cuando alude a los ingresos que "*hayan de calificarse como precio privado con arreglo al artículo 49*", quiere en realidad remitirse a la definición que de los mismos se realiza en el artículo 50.

Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia.

O obxectivo desta lei é a adaptación da lexislación en materia de taxas e prezos da nosa Comunidade Autónoma á doutrina exposta polo Tribunal Constitucional na Sentencia 185/1995, do 14 de decembro, onde establece uns criterios de definición deses conceptos distintos dos que figuran na nosa lexislación vixente; a sentenza do alto tribunal que fixa eses criterios tiña como motivo un recurso de inconstitucionalidade dirixido contra a Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e prezos públicos do Estado, e nesta, entre outros artigos, decláranse inconstitucionais os que definen aqueles ingresos. Obviamente, aínda que a lexislación vixente na nosa Comunidade, Lei 13/1991, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, non se ve directamente afectada pola sentenza citada, como os seus conceptos están inspirados nos da lexislación estatal, si que se fai conveniente realiza-la debida adecuación.

A sentenza referida declaraba a inconstitucionalidade de determinados artigos desa lei no sentido de entender que certos ingresos, que ata daquela constituían prezos públicos e quedaban fóra da órbita do principio de reserva de lei, en tanto e en canto participan das notas características das prestacións patrimoniais públicas polo seu grao de continuidade ou necesidade para un adecuado desenvolvemento persoal ou social, necesitan norma con rango de lei para o seu establecemento.

O obxectivo antes manifestado podíase conseguir por dous procedementos posibles: modificando concretamente a lexislación vixente no que fose necesario ou promulgando unha nova lei que a derogase; optouse pola segunda alternativa por entender que é a mellor fórmula para preservar-lo principio de seguridade xurídica mediante unha maior claridade na normativa.

A lei que se derroga, no que se refire ás taxas, ten o carácter de lei de bases, que foi desenvolvida polo Decreto legislativo 1/1992, do 11 de abril; o uso desa técnica legislativa estaba xustificada polo estado naquel momento existente de confusión e proliferación de normas que facía difícil un coñecemento práctico e unitario de tódalas tarifas que correspondían ás taxas de toda a actividade da Administración autonómica. Non é a situación actual e polo tanto optouse por establecer esas tarifas nos correspondentes anexos do texto.

A estrutura desta lei consta de tres títulos, dúas disposicións adicionais, unha transitória, unha derogatoria, catro derradeiras e cinco anexos.

O título I, Disposicións xerais, contén un conxunto de disposicións comúns á totalidade dos instrumentos financeiros e reguladores que se establecen na lei: taxas, prezos e mais exaccións e subvencións reguladoras.

O título II regula os instrumentos financeiros e dedícalle un capítulo a cada un deles: o primeiro ás taxas, o segundo ós prezos públicos e o terceiro ós prezos privados.

As tarifas ou as contías que deben satisfacerse por taxas veñen determinadas nos anexos correspondentes: no primeiro, os supostos da taxa por servizos administrativos; no segundo, os correspondentes á taxa por servizos profesionais, modalidade de actuacións administrativo-facultativas; no terceiro, os da taxa por servizos profesionais, modalidade de

2. O rendemento proveniente deles aplicarase integramente ó orzamento de ingresos que corresponda, e o seu ingreso deberase realizar nas caixas do tesouro da Facenda galega ou, a través das entidades financeiras colaboradoras, nas contas autorizadas pola consellería competente en materia de facenda.

3. Cando os suxeitos referidos no artigo 3 entreguen bens ou presten servizos para os que exista demanda, deberanse aplicar os instrumentos financeiros que sexan utilizables de acordo coas normas desta lei.

4. Para este fin, todo proxecto de creación dunha entidade ou incluso de oferta dun novo ben ou servizo, independentemente doutros requisitos, deberá ir acompañado dunha memoria económica elaborada pola consellería correspondente, na que, ademais de valorala conveniencia do proxecto, se propoñerán os instrumentos financeiros que, de se-lo caso, sexan aplicables. Idéntico procedemento esixirase para os supostos de modificación das contías dos instrumentos ós que se refire esta lei. Sobre a devandita memoria emitirá informe a consellería competente en materia de facenda.

Artigo 5. Responsabilidades.

1. As autoridades, os funcionarios públicos, os axentes ou asimilados que de forma voluntaria e culpable esixan indebidamente un instrumento financeiro dos establecidos nesta lei ou que o fagan en contía superior á establecida incorrerán en falta disciplinaria moi grave, sen prexuízo das responsabilidades doutra orde que puidesen derivar da súa actuación.

2. Cando adopten na mesma forma resolucións ou realicen actos que infrinxan esta lei e as demais normas que regulamentan esta materia, estarán obrigados ademais a indemnizaren a Facenda pública polos prexuízos causados.

Artigo 6. Normativa aplicable.

1. Os instrumentos financeiros regulados nesta lei rexeranse polas normas contidas nela e polas normas regulamentarias dictadas no seu desenvolvemento.

2. Serán aplicables o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia e maila Lei xeral tributaria e as demais disposicións xerais en materia tributaria, así como aquelas disposicións dictadas no seu desenvolvemento, en canto resulten aplicables, de acordo co réxime xurídico establecido nesta lei en concreto para cada instrumento financeiro.

3. Os instrumentos financeiros transferidos no marco da transferencia de competencias do Estado á Comunidade Autónoma ou das corporacións locais galegas á Comunidade Autónoma rexeranse polo disposto nas disposicións transitorias dos decretos de traspaso. No caso de silencio das normas de traspaso, serán aplicables as normas autonómicas en todos os seus termos, a excepción do disposto no parágrafo seguinte, desde o momento no que teña efectividade o traspaso das competencias, dos servizos ou dos bens que dean lugar ó instrumento financeiro correspondente.

Nos supostos de prestacións de servizos, realizacións de actividades ou entrega de bens a consecuencia da transferencia de competencias do Estado ou das corporacións locais ga-

Artigo 9. Reserva de lei.

1. O establecemento das taxas e a regulación dos seus elementos esenciais faranse mediante norma con rango de lei do Parlamento de Galicia.

2. Para os efectos previstos no apartado anterior son elementos esenciais das taxas: o feito impositivo, o suxeito pasivo, a base impositiva, a cota tributaria e o devengo.

3. Así mesmo, a lei regulará o establecemento, a supresión e a prórroga de exencións e bonificacións.

4. A aplicación dunha taxa establecida a supostos concretos de utilización privativa, ocupación ou aproveitamento especial do dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia, venda de bens, realización de actividades ou prestación de servizos poderase facer na Lei de orzamentos de cada ano.

Así mesmo, na devandita lei, poderanse modificar e actualizar as cotas tributarias correspondentes ás taxas vixentes.

5. Non se poderán establecer taxas que non sexan consecuencia da utilización privativa, a ocupación ou o aproveitamento especial do dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia ou da subministración ou entrega, prestación ou realización dalgún ben, servizo ou actividade, respectivamente.

6. Sen prexuízo do establecido no apartado 2, a cota tributaria poderá ser fixada regulamentariamente cando así estea previsto en norma de rango legal e sempre dentro dos límites dispostos por ela.

Artigo 10. Principio de capacidade económica.

En canto as características do tributo o permitan, terase en conta, para a fixación da cota tributaria das taxas, a capacidade económica do suxeito pasivo, en especial cando se establezan consumos ou se impoñan actividades susceptibles de afectaren a tódolos cidadáns.

Artigo 11. Principio de equivalencia.

1. O rendemento total previsible da taxa non poderá exceder, no seu conxunto, do custo total de produción do ben, do servizo ou da actividade.

2. No caso da taxa pola utilización privativa, a ocupación ou o aproveitamento especial do dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia tomarase como referencia o valor de mercado correspondente ou o da utilidade derivada daquela.

Artigo 12. Supostos de non suxeición.

Non se lles esixirán taxas ós suxeitos ós que se refire o artigo 3 desta lei.

Artigo 13. Clases de taxas.

1. Por esta lei establécense as taxas seguintes:

- a) A taxa por servizos administrativos.
- b) A taxa por servizos profesionais.
- c) A taxa por venda de bens.
- d) A taxa por utilización privativa, ocupación ou aproveitamento especial do dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia.

custos directos e indirectos que contribúan á formación do custo total do servicio ou da actividade, consonte o disposto no punto anterior, así como unha previsión tocante ó custo unitario que lle corresponde a aquel e mais unha proposta da cota tributaria aplicable.

5. Cando a utilización privativa, a ocupación ou o aproveitamento especial do dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia leven aparelado unha destrución ou deterioración del non previstas na memoria económico-financeira, o beneficiario, sen prexuízo do pagamento da cota tributaria correspondente, estará obrigado ó reintegro do custo total dos respectivos gastos de reconstrucción ou reparación. De os danos resultaren irreparables, a indemnización consistirá nunha contía igual ó valor dos bens destruídos ou ó importe da deterioración dos danados.

6. As cotas tributarias revisaranse como mínimo cada cinco anos, baseándose nos rexistros de gastos e ingresos e na correspondente memoria económico-financeira sobre o custo e a actividade realizada. Non obstante, estas cotas tributarias poderán ser obxecto de actualización anual na Lei de orzamentos en función das variacións do custo económico motivadas pola fluctuación dos índices dos prezos ó consumo e dos incrementos das retribucións do persoal adscrito ós mencionados órganos, organismos autónomos ou entidades de dereito público.

Artigo 16. Pagamento.

1. O pagamento das taxas poderase esixir ben en calquera momento entre a solicitude e o devengo ou ben no momento da solicitude cando esta coincida co devengo.

Tamén se poderá esixir a anticipación ou o depósito previo do importe total ou parcial das taxas na forma que, por proposta da consellería competente en materia de facenda, se determine regulamentariamente.

2. Os suxeitos activos ós que se refire o artigo 3 desta lei denegarán a utilización privativa, a ocupación ou o aproveitamento especial do dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia, a entrega do ben, a prestación do servicio ou a realización da actividade cando o suxeito pasivo incumpra o pagamento. Así mesmo devolverá as cantidades que percíbise cando, por causas non imputables ó suxeito pasivo, non se levase a cabo o feito imponible.

3. O pagamento das taxas efectuarase mediante ingreso no tesouro da Facenda galega, de acordo coas modalidades regulamentariamente establecidas.

4. Poderase autorizar igualmente o pagamento das taxas mediante o emprego de efectos timbrados da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos que regulamentariamente se determinen.

5. O pagamento das taxas poderase adiar ou fraccionar na forma e nas condicións regulamentariamente determinadas. Nestes casos, as cotas adiadas devengarán o xuro de mora vixente e deberanse garantir mediante hipoteca, peñor, aval bancario ou outra garantía suficiente, agás que sexan inferiores á cifra que por orde fixe o conselleiro competente en materia de facenda.

6. A Administración esixirá pola vía de constrinximento as débedas tributarias polas taxas devengadas e non satisfeitas nos prazos establecidos regulamentariamente, de acordo coa normativa que sexa aplicable.

Sección 2ª**Taxa por servicios administrativos****Artigo 21. Feito impositivo.**

1. Constitúe feito impositivo da taxa por servicios administrativos a prestación, por parte dos suxeitos relacionados no artigo 3 desta lei, de calquera servicio administrativo que se refira, afecte ou beneficie dun modo particular os suxeitos pasivos, en cada unha das modalidades seguintes:

a) Modalidade de autorizacións: pola concesión de autorizacións, permisos, licencias, guías, expedición de títulos, dilixenciamento de libros e, en xeral, documentos que facultan o suxeito pasivo para realizar unha actividade sometida legalmente á devandita condición previa.

b) Modalidade de rexistro: pola inscrición en rexistros, matrículas ou relacións mantidas pola Administración en tanto que resulte obrigado para o desenvolvemento dunha actividade ou o exercicio dun dereito por parte do suxeito pasivo.

c) Modalidade de certificacións: pola verificación de documentos, expedición de certificacións, copia de arquivos e elaboración de documentos acreditativos de información que conste en arquivos ou rexistros públicos.

2. Non se esixirá a taxa por servicios administrativos cando se trate de compulsas ou contextos de documentos que se deban achegar a solicitudes, escritos ou comunicacións presentados polo cidadán e realizados no ámbito de actuación dos rexistros consonte o disposto no artigo 38.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 22. Suxeitos pasivos.

1. Son suxeitos pasivos contribuíntes da taxa as persoas físicas ou xurídicas que soliciten ou provoquen as actuacións administrativas que constitúen o feito impositivo.

2. Tamén terán a consideración de suxeitos pasivos as herdanzas xacentes, as comunidades de bens e as demais entidades carentes de personalidade xurídica que constitúan unha unidade económica ou un patrimonio separado susceptible de tributación.

Artigo 23. Exencións.

Gozarán de exención desta taxa:

1.-A expedición de certificados de retribucións satisfeitas pola Xunta de Galicia co obxecto de xustificación en relación co imposto sobre a renda das persoas físicas.

2.-A expedición de certificados e compulsas que o persoal da administración solicite respecto de necesidades propias do posto de traballo ou da relación de servicios.

3.-Os alumnos por calquera actuación en materia de ensinanzas non universitarias.

4.-As compulsas realizadas nas oficinas de emprego para os desempregados na tramitación de expedientes que sexan competencia das devanditas oficinas.

5.-A inscrición nas convocatorias para a selección de persoal da Comunidade Autónoma

Para os efectos da exacción do tributo, as actividades de inspección e control sanitario que se inclúen dentro do feito impositivo da tarifa 08 da modalidade de actuacións administrativo-facultativas catalóganse da seguinte forma:

a) Inspeccións e controis sanitarios ante mortem para a obtención de carnes frescas de gando bovino, porcino e xabaráis, ovino, caprino e outros ruminantes, coellos e caza menor de pluma e pelo, solípedos-équidos, aves de curral e outras especies.

b) Inspeccións e controis sanitarios post mortem dos animais sacrificados para a obtención das mesmas carnes frescas.

c) Control documental das operacións realizadas no establecemento.

d) Control e selado das canais, vísceras e sobras destinadas ó consumo humano, así como marcaxe das pezas obtidas nas salas de despezamento.

e) Control das operacións de almacenamento de carnes frescas para o consumo humano, desde o momento no que así se estableza, agás as relativas a pequenas cantidades realizadas en locais destinados á venda ós consumidores finais.

Para os efectos da exacción do tributo, as actividades de inspección e control sanitario que se inclúen dentro do feito impositivo da tarifa 36 da modalidade de actuacións administrativo-facultativas catalóganse da seguinte forma:

-Control de determinadas substancias e residuos en animais e os seus produtos, na forma prevista pola normativa vixente.

3. No suposto da tarifa 99 da modalidade de actuacións profesionais, relacionada no anexo 3, o feito impositivo estará constituído, segundo cada caso, polas seguintes operacións:

-Na tarifa X-1, a utilización das augas do porto, instalacións de sinais marítimos e balizamento, canles de acceso, esclusas (sen incluí-lo amarre, o remolque ou a sirgaxe nela) e pontes móbiles, obras de abrigo e zonas de ancoraxe, e seralles aplicable na contía e nas condicións que se indican no anexo 3 a tódolos barcos que entren nas augas do porto.

-Na tarifa X-2, o uso das obras de atracada e dos elementos fixos de amarre e defensa, e seralles aplicable na contía e nas condicións que se indican no anexo 3 a tódolos barcos que utilicen as obras e os elementos antes sinalados que fosen construídos total ou parcialmente pola Administración portuaria ou que sexan propiedade dela.

-Na tarifa X-3, a utilización polas mercadorías e polos pasaxeiros que embarquen, desembarquen, transborden ou efectúen tránsito marítimo ou terrestre das zonas de manobra, manipulación e tránsito, dos accesos e vías de circulación terrestres viarias e ferroviarias e doutras instalacións portuarias fixas. Así mesmo, inclúese no feito impositivo a súa utilización polas mercadorías ou polos pasaxeiros que accedan ou saian da zona de servizo do porto por vía terrestre sen utilizar en ningún momento a vía marítima, agás que teñan como orixe ou destino instalacións fabrís, de transformación, loxísticas ou de almacenaxe situadas na zona de servizo do porto.

-Na tarifa X-4, a utilización polos buques pesqueiros en actividade e os produtos da pesca marítima fresca das augas do porto, das instalacións de balizamento, dos peiraos, das bacías, das zonas de manipulación e mais dos servizos xerais ou de policía.

-Na tarifa X-5, a utilización polas embarcacións deportivas ou de lecer, e polos seus tri-

2.-Na tarifa 36 da modalidade administrativo-facultativa, relacionada no anexo 2:

-Na tarifa relativa ó control de substancias e residuos en animais e os seus produtos, os titulares da explotación dos establecementos onde se leven a cabo os citados controis e análises.

Dous.-Os suxeitos pasivos anteriores deberanlles trasladar, cargando o seu importe en factura, a taxa correspondente ós interesados que solicitasen a prestación do servizo ou para os que se realicen as operacións de sacrificio, despezamento, almacenamento ou control de determinadas substancias e residuos animais e os seus produtos descritos no artigo 26.2, e procederán posteriormente ó seu ingreso a favor da Comunidade Autónoma, na forma que regulamentariamente se estableza.

No caso de que o interesado, á súa vez, lle adquirise o gando en vivo a un terceiro, para sacrificio, poderá esixir deste o importe da taxa correspondente ó concepto da tarifa 36 da modalidade administrativo-facultativa.

Tres.-Entenderase que son interesados non só as persoas físicas ou xurídicas que soliciten os mencionados servizos, senón tamén as herdanzas xacentes, as comunidades de bens e as demais entidades que, aínda que non teñan personalidade xurídica de seu, constitúan unha unidade económica ou un patrimonio separado.

5. Na tarifa 99 da modalidade de actuacións profesionais, relacionada no anexo 3, serán suxeitos pasivos as seguintes persoas ou entidades:

-Das tarifas X-1 e X-2, os armadores ou os seus representantes ou os consignatarios dos barcos que utilicen os servizos gravados.

-Da tarifa X-3, os armadores ou os consignatarios dos barcos que utilicen o servizo e os propietarios do medio de transporte cando a mercadoría entre e saia do porto por medios exclusivamente terrestres.

-Da tarifa X-4, o armador do buque ou quen na súa representación realice a primeira venda.

O suxeito pasivo deberá facer repercuti-lo importe da tarifa X-4 sobre o primeiro comprador da pesca, de o haber, polo que este queda obrigado a soporta-la devandita repercusión, que se fará constar de maneira expresa e separada na factura ou no documento equivalente. As controversias que se susciten entre o suxeito pasivo e o comprador repercucido serán da competencia da Xunta Superior de Facenda.

-Da tarifa X-5, con carácter solidario, o titular da embarcación ou o seu representante autorizado e, de se-lo caso, o titular do dereito de uso preferente do amarre ou da ancoraxe. Nas zonas de concesión nas que o titular desta se subroga na obriga dos suxeitos pasivos, nos termos establecidos na regra décimo primeira, letra b), desta tarifa X-5, o concesionario será o substituto do contribuínte e terá que cumprir no lugar daquel as obrigas formais e materiais derivadas da obriga tributaria.

-Da tarifa polo exercicio de actividades comerciais, industriais e de servizos:

a) O titular da concesión ou autorización de ocupación do dominio público.

b) O titular da autorización de actividade, cando o exercicio desta non leve consigo a ocupación do dominio público.

Artigo 31. Devengo.

1. A taxa devengarase cando se inicie a prestación do servizo.

2. A taxa que corresponde satisfacer polas tarifas 08 e 36 da modalidade administrativo-facultativa devengarase no momento no que se leven a cabo as actividades de inspección e control sanitario de animais e os seus produtos, nos establecementos ou nas instalacións nos que se desenvolven estas, sen prexuízo de que se esixa o seu pagamento previo cando a realización do control sanitario se inicie por solicitude do suxeito pasivo ou do interesado.

Na tarifa 08 da modalidade administrativo-facultativa, no caso de que nun mesmo establecemento e por solicitude do interesado se realicen en forma sucesiva as tres operacións de sacrificio, despezamento e almacenamento, ou dúas delas en fases igualmente sucesivas, o total da contía da taxa determinarase de forma acumulada ó inicio do proceso, con independencia do momento do devengo das cotas correspondentes, sen prexuízo do previsto nas regras de acumulación.

3. Na tarifa 99 da modalidade por actuacións profesionais, a taxa devengarase, en cada caso:

-Na tarifa X-1, cando o barco entrase nas augas de calquera das zonas do porto.

-Na tarifa X-2, cando o barco atracase ó peirao. A atracada contarase desde a hora para a que se autorizase ata o momento de larga-la última amarra do peirao.

-Na tarifa X-3, cando se inicien as operacións de paso das mercadorías ou dos pasaxeiros polo porto.

-Na tarifa X-4, cando se inicien as operacións de embarque, desembarque ou transbordo dos produtos da pesca en calquera punto das augas ou da zona terrestre baixo a xurisdición do organismo portuario.

-Na tarifa X-5, cando a embarcación entre nas augas do porto ou no recinto portuario.

-Na tarifa E-1, desde o momento de posta á disposición do correspondente guindastre.

-Na tarifa E-2, entenderase que o inicio da prestación do servizo se produce na data de reserva do espazo solicitado.

-Na tarifa polo exercicio de actividades comerciais, industriais e de servizos, producirase no momento da notificación do outorgamento da autorización de actividade ou da concesión ou autorización de ocupación do dominio público portuario respecto do ano en curso. Nembargantes, no suposto de que por execución de obras e outras causas xustificadas se producise unha demora no inicio da actividade, o devengo da taxa non se producirá ata o momento no que esta se inicie. Nos anos sucesivos o devengo producirase o 1 de xaneiro.

Artigo 32. Tarifas.

A taxa esixirase de acordo coas tarifas contidas nos anexos 2 e 3 desta lei, para as modalidades de actuacións administrativo-facultativas e actuacións profesionais, respectivamente, e entenderanse co imposto sobre o valor engadido, de se-lo caso, a excepción da tarifa 99 prevista no anexo 3.

Artigo 39. Suxeito pasivo.

Son suxeitos pasivos desta taxa os titulares dos permisos de ocupación temporal, concesións administrativas ou calquera outra autorización, cando teñan por obxecto a utilización privativa, a ocupación ou o aproveitamento especial do dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 40. Bonificacións e exencións.

Á tarifa 02 contida no anexo 5 seranlle aplicables as bonificacións e exencións que se relacionan a seguir:

a) Cando os suxeitos pasivos realicen investimentos en obras de recheo, consolidación ou mellora de terreos. A contía da bonificación determinarase en función do investimento realizado, de conformidade coa escala que se estableza regulamentariamente, atendendo ó tipo de obra e ó seu custo, e non poderá exceder do 50% da contía correspondente á ocupación das augas do porto ou, de se-lo caso, dos terreos.

b) Cando o obxecto da concesión consista na urbanización e comercialización de zonas de almacenaxe e de actividades loxísticas, a contía de bonificación

determinarase en función do investimento privado realizado, de conformidade coa escala que se estableza regulamentariamente, atendendo ó tipo de obra e ó seu custo, e non poderá exceder do 40% da contía correspondente á ocupación de terreos. Esta bonificación non se poderá aplicar durante un período superior ó establecido para a finalización de cada fase de urbanización no título concesional.

c) Cando o titular da concesión ou autorización sexa algún órgano das administracións públicas e o obxecto destas sexan actividades de interese social e cultural. O importe desta bonificación será do 50% da contía correspondente á ocupación de terreos.

d) Cando a ocupación do dominio público portuario teña por destino a construción e/ou explotación de lonxas, fábricas de xeo e naves de redes, a contía da taxa terá unha bonificación do 90%.

e) Nas concesións ou autorizacións de dominio público portuario outorgadas a entidades náuticas ou culturais sen ánimo de lucro para actividades de ensinanza da náutica deportiva ou de conservación ou recuperación de embarcacións tradicionais terá unha bonificación do 90% no que se refire exclusivamente a estas actividades, sempre que non sexan obxecto de explotación económica.

f) Estarán exentos do pagamento da taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio portuario:

-Os órganos e as entidades das administracións públicas cando estean directamente relacionados con actividades de vixilancia, de represión do contrabando, de protección civil de salvamento e de loita contra a contaminación mariña ou coa defensa nacional.

-As corporacións locais cando se trate de actividades encadradas entre as súas finalidades públicas e estas non sexan obxecto de explotación económica.

g) A Cruz Vermella Española está exenta do pagamento da taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público portuario respecto das actividades marítimas propias que esta institución ten encomendadas.

Capítulo II

Prezos públicos

Artigo 43. Concepto.

Son prezos públicos as contraprestacións pecuniarias percibidas polos suxeitos ós que se refire o artigo 3 desta lei pola prestación de servicios ou a realización de actividades efectuadas en réxime de dereito público cando, prestándose tamén tales servicios ou actividades polo sector privado, sexan de solicitude voluntaria por parte dos administrados; para estes efectos enténdese que os servicios sociais, sanitarios e educativos se prestan en réxime de dereito público.

Artigo 44. Normativa aplicable.

1. En todo o non previsto nesta lei os prezos públicos obxecto dela regularanse polo disposto no texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia e nas súas normas de desenvolvemento.

2. Aplicaranse de forma supletoria a Lei xeral tributaria e as demais disposicións xerais en materia tributaria, así como as súas normas de desenvolvemento.

Artigo 45. Obrigados ó pagamento.

Estarán obrigados ó pagamento dos prezos públicos os que, en cada caso, determine a norma que os estableza.

Artigo 46. Contía dos prezos públicos.

1. Os prezos públicos fixaranse na contía que cubra como mínimo os custos económicos derivados do servizo ou das actividades prestadas.

2. Cando existan razóns de interese público que o xustifiquen, poderanse sinalar prezos públicos en contía inferior á indicada no apartado anterior, logo de adopción das previsións orzamentarias precisas para a cobertura da parte de custo subvencionada.

Artigo 47. Fixación de prezos públicos.

1. Os prezos públicos serán fixados por decreto, por proposta da consellería da que dependa o órgano ou a entidade oferente. A devandita proposta incluírá necesariamente unha memoria económica que deberá conter como mínimo o seguinte:

a) Información suficiente respecto do custo de prestación dos bens ou servicios de que se trate.

b) Xustificación da política de prezos proposta, a cal deberá en todo caso resultar suficiente para cubri-los custos totais, sen prexuízo da posible subvención reguladora correspondente.

2. Sobre a proposta á que se refire o apartado anterior deberá emitir informe favorable a consellería competente en materia de facenda.

Artigo 51. Fixación.

Os prezos privados serán fixados polas consellerías correspondentes, logo de informe favorable da de Economía e Facenda, atendendo ás condicións e circunstancias do mercado no que operen, sen prexuízo de que excepcionalmente se poidan aplicar subvencións reguladoras. Para estes efectos, a consellería correspondente remitiralle á de Economía e Facenda o proxecto normativo xunto coa memoria económica na que se xustifiquen os aspectos anteriores. A norma que fixe estes prezos deberá ser publicada no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 52. Xestión.

A xestión dos prezos privados correspóndelles ós suxeitos relacionados no artigo 3 desta lei, quedando así mesmo sometidos ás obrigas enumeradas no artigo 48.1.

Artigo 53. Réxime xurídico.

Os actos, os negocios e, en xeral, as relacións xurídicas que deriven das actuacións económicas das entidades oferentes que teñan unha contraprestación que deba cualificarse como prezo privado de acordo co artigo 49 rexeranse polas normas de ordenación xurídica privada que resulten aplicables.

Título III Instrumentos reguladores

Artigo 54. Concepto.

1. Son instrumentos reguladores as exaccións ou, de se-lo caso, as subvencións utilizadas co obxecto de influír sobre o consumo de determinados bens ou servicios.

2. A aplicación dunha exacción reguladora determinará unha tarifa para o consumidor ou usuario superior ó importe normalmente percibido pola institución ou entidade oferente do ben ou servicio do que se trate. Pola contra, a utilización dunha subvención reguladora permitirá aplicarlles ós consumidores prezos ou tarifas inferiores ó custo de produción dos bens ou servicios.

Artigo 55. Establecemento de instrumentos reguladores.

1. O establecemento de calquera exacción ou subvención reguladoras deberase facer mediante norma con rango de lei. Na lei de creación das exaccións reguladoras recolleranse os seus elementos esenciais así como a finalidade da intervención que se pretende.

2. Na Lei de orzamentos de cada ano poderanse modifica-los elementos determinantes da contía das exaccións reguladoras sempre que non se altere o seu propósito ou natureza. Nesta mesma lei ofrecerase información global respecto das compensacións ou subvencións que puidesen comporta-la venda de bens e a prestación de servicios cando o oferente sexa un dos suxeitos ós que se refire o artigo 3 desta lei.

Disposición derogatoria única.-Derogación de determinadas normas legais.

Quedan derogadas cantas normas se opoñan ó establecido por esta lei, e, en particular, a Lei 13/1991, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, agás as súas disposicións adicionais primeira e segunda, así como o Decreto lexislativo 1/1992, do 11 de abril, polo que se aproba o texto articulado das bases contidas no capítulo 3º do título II da Lei 13/1991, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposición derradeira primeira.-Modificación da Lei 3/1985, do 12 de abril, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Modifícase o apartado 2 do artigo 54 da Lei 3/1985, do 12 de abril, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, que queda redactado como segue:

"2. As concesións outorgaranse para unha finalidade concreta, con determinación do seu obxecto e límites, sendo esixible como contraprestación a contía da taxa que resulte vixente no momento do seu devengo".

Disposición derradeira segunda.-Modificación da Lei 6/2002, do 27 de decembro.

Engádeselle unha nova letra d) ó artigo 28.Dous da Lei 6/2002, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2003, coa seguinte redacción:

"d) Para financia-las variacións de activos financeiros que sexan considerados como tales desde o punto de vista do SEC 95".

Disposición derradeira terceira.-Desenvolvemento regulamentario.

A Xunta de Galicia, por proposta do conselleiro de Economía e Facenda, desenvolverá regulamentariamente as normas desta lei dentro dos seis meses seguintes á súa entrada en vigor.

Disposición derradeira cuarta.-Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación.

Santiago de Compostela, nove de decembro de dous mil tres.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

NOTA.- Deseguido a Lei recolle os seguintes Anexos que, pola súa extensión, non publicamos.

- 1.- Taxa por servicios administrativos.*
- 2.- Taxa por servicios profesionais. Modalidades administrativo-facultativas.*
- 3.- Taxa por servicios profesionais. Modalidades actuacións administrativas.*
- 4.- Taxa de venda de bens.*
- 5.- Taxa por utilización privativa, ocupación ou aproveitamento especial do dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia.*